

CARRIEL

# ¿Terrorismo de Estado?

Javier  
Dario  
Carrriel

jeatvopt@cablenet.co

En el centro de San José de Apartadó la población ha levantado un muro que recuerda a sus muertos. En cada una de las 150 piedras se lee el nombre de los habitantes que han sido asesinados por la guerrilla, por los paramilitares o por los militares. Esta semana el muro creció porque se le agregaron ocho piedras con los nombres de las víctimas de la última matanza.

Para recuperar sus cuerpos e impedir la manipulación de los cadáveres, el primer día estuvieron vigilando día y noche 25 campesinos de La Resbalosa; al día siguiente se les unieron 100 vigilantes más, que se mantuvieron allí mientras llegaban los investigadores de la Fiscalía; más tarde fueron 300 los que, ante la tardanza de las autoridades, no quisieron retrasar el homenaje a sus muertos y los llevaron a San José en un recorrido de siete horas.

A estos campesinos los han venido matando desde que decidieron constituirse en Comunidad de Paz; es decir, que ante la incapacidad del Estado para garantizarles seguridad, resolvieron que en su territorio no tenían nada que hacer los hombres armados, y que a ninguno de ellos le prestarían colaboración. Ante ese rechazo todos los grupos armados reaccionaron de acuerdo con la lógica brutal de la guerra: "si no están con nosotros, es porque están contra nosotros", y comenzaron a matarlos.

La Comunidad de Paz ha tenido que pagar un alto costo, que cada vez asombra y enardece más al mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución del 9 de octubre de 2000, ordenó al gobierno colombiano proteger las vidas de estos campesinos; reiteró esa decisión el 11 de junio de 2002 y el 17 de noviembre de 2004. Miembros de organizaciones internacionales han llegado a la población para convertirse en escudos humanos de los miembros de esta comunidad y para

mostrarles a los asesinos el rostro de la comunidad mundial estupefacta ante la barbarie. Desde el 29 de julio de 2003 se han presentado al presidente Álvaro Uribe nueve cartas con recurso de petición, para que se le dé a San José de Apartadó la protección que necesita como asunto de vida o muerte. La última de esas cartas fue enviada el 19 de enero de este año, un mes antes de la masacre. Ninguna de estas cartas ha tenido respuesta. De no ser que se tenga por tal la alusión pública del Presidente a San José de Apartadó cuando llamó a esa región corredor de la guerrilla y a la Comunidad de Paz, obstrucción de la justicia, por la negativa de sus habitantes a cooperar con los actores armados.

La ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuarras, sabe por qué dijo que la matanza fue obra de los militares. Lo atestiguan los campesinos de las veredas Las Nieves, Mulatos y la Resbalosa que desde antes del día 19 vieron la operación de control de las tropas de la Brigada Móvil 11 y de la Brigada 17; y lo confirmó el campesino que logró huir cuando fueron detenidos Luis Eduardo y su familia y están seguros de eso las seis familias retenidas durante cuatro días en el Barro por militares que hablaron de haber dado muerte a tres guerrilleros.

El Ministro de Defensa, desde Bogotá y citando como fuentes a los comandantes militares de la zona, se apresuró a acusar a las Farc y a absolver al Ejército por estas muertes. Fueron muertes a garrote, en que los cadáveres exhibían huellas de tortura, en que la cabeza de un niño apareció desprendida del cuerpo por la violencia del garrotazo, en que no hubo combate ni razón alguna que explicara la barbarie.

En esas lejanas veredas la guerra ha mostrado su catadura más siniestra e inquietante: porque todos los hechos parecen apuntar a la responsabilidad de los militares; porque se agrega el silencio inexplicable del Presidente ante las reiteradas y angustiadas peticiones de ayuda; porque agrava las cosas la insistencia desatendida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; porque sumados, todos estos hechos, parecen configurar un acto de terrorismo de Estado contra la parte más débil de la población.